

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO NUEVA PATRIA (MRNP)

BALANCE DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 2008

INTRODUCCIÓN

Las elecciones presidenciales #13, posterior al derrumbe de la tiranía de Rafael Trujillo, fueron celebradas el pasado 16 de mayo. De ese proceso, resultó reelecto a la presidencia de la República el señor Leonel Fernández, candidato del Partido de la Liberación Dominicana y otros 11 partidos. Aunque legal, su reelección arrastra una amplia sombra de ilegitimidad dado el comprobado uso masivo, de su parte y su partido, de los recursos y bienes del estado en beneficio de su estrategia continuista.

Los resultados de este torneo presidencial #13, restablecen el sistema multipartidista nacional dominado por 2 de sus formaciones integrantes, anulando, por el momento, el que funcionó desde las elecciones generales del 1990 y donde prevalecían 3 grandes partidos. En el actual, el Reformista Social Cristiano, partido que representó históricamente el conservadurismo y que gobernó el 50% de los gobierno conocidos desde el 1966 hasta hoy, queda fuera de escena como partido mayoritario, condición, de acuerdo a la ley electoral, que requiere de un mínimo de 5% de la votación.

Como esperanza en construcción, surgió en este proceso un espacio de participación política-electoral concebido mas allá de la coyuntura y que teniendo como candidatos a Guillermo Moreno y Maria Teresa Cabrera, logró, por lo menos, aunar la mayor parte de las expresiones orgánicas del litoral de izquierda y a grupos sociales y ciudadanos/as progresistas, y trascender, tanto en su discurso como en su candidatura presidencial, nacionalmente.

Ahora se presenta un nuevo, y tal vez mas complicado, desafío para este litoral y para todos los sectores que apuestan a la democratización real de la sociedad. Un desafío que requiere de inteligencia, prudencia y tolerancia. Uno que nos obliga a preservar lo acumulado, pero sobretodo a potencializarlo. Un desafío que nos reclama internalizar que el cambio con sentido progresista y de la historia que necesita y urge la sociedad dominicana, impone la construcción, lo mas democráticamente posible, de una amplia y vigorosa convergencia ciudadana, política y social.

Aquí el resumen del análisis de la coyuntura hecho por el Movimiento Revolucionario Nueva Patria.

SE IMPONE EL PROYECTO REELECCIONISTA, AUNQUE EL PLD BAJA 4 PUNTOS PORCENTUALES, Y EL PARTIDO REFORMISTA NO SUPERA EL 5% DE LA VOTACIÓN

Leonel Fernández resultó reelecto, como presidente dominicano, con un 53.83% de la votación válida, al obtener el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus 11 partidos aliados 2, 199, 734 votos. Su más cercano competidor, Miguel Vargas Maldonado, ocupó la 2da votación más alta al lograr el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y sus fuerzas aliadas 1, 654,066 votos, lo que equivale a un 40.48% del universo de votantes válido.

Mientras el 94% de la votación quedó acumulado en el PLD y el PRD, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), entidad tradicional de la derecha política que ha gobernado 22 años (50%) de los 43 años transcurridos desde la Revolución de Abril hasta hoy, sólo logró alcanzar 187, 654 votos, quedando así ubicado en un lejano y anémico tercer lugar en la preferencia del electorado dominicano, cayendo en la categoría de minoritario al no lograr el 5% de la votación. De esta manera se reducen significativamente los beneficios económicos que por la ley de financiamiento electoral está supuesto a recibir, pasando de 280 millones en el 2008 a unos posibles 25 millones a partir de ahora.

Comparado con los resultados de las elecciones presidenciales del 2004, los resultados actuales sugieren variables importantes ha considerar en el diseño de formulaciones, comportamientos tácticos y planes políticos, tanto para el oficialismo como para el litoral opositor en la variedad de sus integrantes.

En las del 2004, el bloque electoral liderado por el PLD e integrado, además, por otros 6 partidos debidamente reconocidos, obtuvo 2, 063, 871 votos, para un elevado 57.11% de la votación. En cambio, en la recién pasada contienda electoral, si bien logra la victoria en primera vuelta lo hace con 4 puntos porcentuales menos al quedar con 53.83%, aun y cuando aumentó a 11 el número de partidos aliados.

Como entidad partidaria, si bien logra el PLD aumentar su caudal de votos en comparación a lo acumulado del 2004, al pasar de 1, 771,377 a 1, 836, 468, para una diferencia a su favor de 65,091 votos, en termino porcentual pasó de un 49.02% a un 44.94%, perdiendo así un poco más de 4 puntos.

Aunque aventaja, con sus aliados, al PRD en 26 provincias y el Distrito Nacional, incluidas las provincias con mayor número de votantes, como individualidad partidaria, es decir sin contar el voto de los aliados, el PLD pierde frente al PRD en 17 provincias y queda en la delantera en 14.

Contrario al caso del PLD, el PRD logra atraer a 467,749 nuevos votantes y porcentualmente logró 8 puntos más en estas elecciones, en relación al 30.6% que alcanzó en las presidenciales del 2004, siendo su candidato de entonces Hipólito Mejía.

Además de este crecimiento partidario, su candidato logró crecer en un 6%, dado el voto aliado, lo que le permitió acumular un 40.48% de la votación.

USO MASIVO E ILEGAL DE LOS BIENES Y RECURSOS DEL ESTADO

Esta disposición de fuerzas entre el oficialista PLD y el principal partido de la oposición, el Revolucionario Dominicano, se da aún y cuando el reeleccionismo contó a su favor con cuantiosos recursos materiales y económicos estatales que abusiva e ilegalmente usó. El caso más patético lo constituyó el de las nominas “CB” y la nominilla, mediante las cuales miles de activistas, militantes y dirigentes del partido oficial recibían un salario por parte del Estado sin trabajar en ninguna de sus dependencias. Este bochornoso acto se hizo público gracias a la responsable función periodística de Nuria Piera.

El mismo, además de ilegal, de acuerdo a Participación Ciudadana, una de las principales organizaciones no partidistas nacionales, es inconstitucional, ya que viola el artículo 102 de la Constitución, que prohíbe a los funcionarios del aparato estatal usar los recursos bajo su responsabilidad en beneficio de **“sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”**.

La práctica clientelal del PLD superó por mucho la de los demás partidos sistémicos, prostituyendo así aún más la democracia existente en nuestro país y sustrayéndole a la ciudadana poder de decisión en los procesos electorales.

Con los bienes y recursos públicos, el PLD compró una cantidad no cuantificable de cédulas a potenciales votantes opositores, múltiples franquicias partidarias y a connotadas figuras del mundo político y social del país. Ni siguiera bajo los gobiernos de los 12 años encabezado por Joaquín Balaguer, que resultaron ser productos del fraude electoral, se vio una práctica tan masiva y descarada de la promoción del transfuguismo político. De esta manera, el de Fernández es un liderazgo nacional muy asociado al poder que representa, no a la lealtad y el reacomodo que se verifica en un sistema partidario sometido a recomposición a partir de situaciones de crisis o de momentos políticos estelares del país.

El uso ilegal y abusivo de los recursos del Estado fue tan escandaloso que instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Embajada de los EE.UU. y Participación Ciudadana tuvieron que expresar su repudio y preocupación a tan deleznable práctica.

La OEA en su informe sobre el proceso electoral, llegó a la conclusión que en nuestro caso el **“problema más acuciante es la inexistencia de una ley de garantías electorales que, en un marco de reelección consecutiva, regule el papel del Estado, sus recursos y las actividades de sus funcionarios en las campañas...”**, de manera que el **“candidato oficial no tenga ventajas inequitativas resultantes de su investidura”**.

De su parte, la embajada estadounidense dijo compartir las preocupaciones de la OEA, a la vez que reclamó una “**línea clara**” entre los gastos estatales y los gastos de campañas políticas.

Otro ángulo resaltado, fue el uso excesivo de la publicidad al servicio del candidato del PLD hecho por múltiples instituciones del Estado, a la vez que la ventajosa inversión hecha por dicho partido con fondos que hasta ahora parecen provenir, una buena parte, del erario público, limitando y restando libertad y objetividad a la mayor parte del periodismo dominicano y el sometimiento de emisoras radiales y canales de televisión controlados por el gobierno al proyecto reeleccionista.

De hecho, Participación Ciudadana, en su Cuarto Informe Electoral, concluido el 13 de mayo, estableció que sólo en el ámbito de la publicidad, del gasto total del 2008, que resultó superior a los 500 millones de pesos, el PLD gastó el 56.14%. Y en el caso de los medios de comunicación en manos del Estado, PC dijo que el 83% de la publicidad en la radio y el 91% en la televisión favoreció al PLD, lo que al vincularse a otras variables irregulares en materia de campaña, llevó a esta entidad no partidaria a considerar que **“el aparato del Estado ha cobijado de forma abismal las aspiraciones reeleccionistas del Presidente Leonel Fernández, en franca violación a lo que establece la ley electoral 275-97.**

Procede indicar, en este contexto, la debilidad que marca la independencia, hacia el Ejecutivo, de poderes que están supuestos ser fundamentales en una sociedad relativamente moderna y democrática, como es el caso del Poder Judicial. Si algo evidencio el caso del préstamo, sin pasar por el Congreso, a la Sun Land, es exactamente su sujeción al Ejecutivo. La acción legal sobre la inconstitucionalidad de dicho préstamo, depositada ante la Suprema Corte, nunca fue abordada por esta, quizás para evitar una toma de decisión, ante del acto de votación del 16 de mayo, que se preveía podía resultar perjudicial a los afanes reeleccionistas del candidato del PLD.

Como se observa, la victoria del proyecto re-eleccionista está asociada a la articulación de una amplia red de franquicias electorales acostumbradas a medrar bajo la sobra del poder y desprovista de propósitos nacionales y referencias doctrinales y programáticas, pero llena de apetencias pueriles, personales y grupales, en todo lo cual el soborno desempeña un rol fundamental.

Está asociada, además, a un descalabro total del Partido Reformista producto de la crisis que atraviesa desde la muerte de Joaquín Balaguer y de la aplicación, por parte del peledéismo, de una estrategia de succionar lo que de este queda y desplazarlo definitivamente, como acaba de ocurrir, de la posición de ser representación hegemónica de las fuerzas políticas y sociales conservadoras, y por ultimo, aunque de manera preponderante, a una millonaria inversión económica, lícita e ilícita, que hacía desigual la competencia y le resta legitimidad a las autoridades electas.

Aunque electo bajo el marco legal que provee la Constitución y Ley Electoral para el montaje y desarrollo de las elecciones, hay razones de sobra para cuestionar los procedimientos que usaron, desde el poder, los peledéistas para ganar las elecciones, por

lo cual la sombra de la ilegitimidad acompañara, como maldición histórica, al reelecto presidente Fernández y a su nuevo gobierno.

UN FUTURO POLITICO INMEDIATO DOMINADO POR EL CONFLICTO Y LA TENSION

Estos resultados electorales, en el marco general de crisis económica que se vive a nivel nacional y en la comunidad mundial, auguran una relación política tensa y conflictiva para el futuro inmediato de la nación dominicana. La posición de algunos sectores de rechazar el llamado hecho por el presidente reelecto a montar un denominado gobierno de unidad nacional, en el mejor sentido del balaguerismo fraudulento, es una muestra de lo que pudiera ser la relación entre gobierno y oposición desde ahora y, en el mejor de los casos, a partir del 16 de agosto, fecha de asunción de las autoridades electas.

Aunque santificado por la cúpula dominante, entre ésta la del empresariado y la Iglesia Católica, el llamado a conformar un “Gobierno de Unidad Nacional” pretende rodear de una inmerecida legitimidad a la nueva administración y suprimirle al conjunto de fuerzas opositoras su condición de tal. Peor aun, este llamado proviene de quien en medio del proceso electoral rechazó debatir con los demás candidatos opositores bajo el infeliz argumento de que los mismos no sabían conceptualizar y por tanto, desde esa lógica elitista, poco podían o pueden aportar en una discusión que tenga como centro los destinos del país.

Las protestas y rebeldías sociales, que inevitablemente se darán y que en ocasiones podrán alcanzar carácter explosivo, estarán supeditadas a una estrategia política que tiene como escenario de posible realización las elecciones congresuales y municipales del 2010. Desde la oposición, serán usadas para desgastar al oficialismo gobernante y reducir su espacio de influencia en el electorado nacional, tras un cambio sustancial en la composición de la actual legislatura dominicana.

De la misma manera, el partido oficial usará la crisis mundial, sobretodo en el ámbito alimentario, para justificar su manejo de la crisis económica interna y su incapacidad para satisfacer las abultadas expectativas que crearon durante el pasado torneo electoral y con las que buscaban, como al efecto ocurrió, concitar el apoyo de la mayoría ciudadana que ejerció el voto el pasado 16 de mayo.

Otro escenario de diferenciación y confrontación que dominará, en lo inmediato, el mundo político y partidario nacional, será el de la reforma electoral y constitucional.

El PLD buscará una reforma sujeta a sus intereses partidarios, por lo que no es descartable suprimir de la Constitución el nunca jamás, que prohíbe la reelección mas allá de un nuevo termino e impide a un ciudadano volver a ser candidato después de haber sido presidente; reducir el porcentaje para ganar las elecciones en la 1era vuelta y extender el periodo del actual Congreso, bajo el propósito de unificar en el tiempo las elecciones presidenciales, congresuales y municipales.

Con lo del nunca jamás el grupo hegemónico dentro del PLD, liderado por el Dr. Fernández, puede resultar ganador por partida doble: abre la puerta a sus aspiraciones continuistas indefinidamente y hace regresar de manera protagónica el fantasma de la candidatura de Hipólito Mejía, con su innegable efecto divisorio a lo interno del PRD.

Sin embargo, opera contra esta posible movida política la opinión de una franja importante de la sociedad que valora perjudicial para la estabilidad e institucionalidad democráticas la reelección indefinida, mas cuando el recién pasado proceso electoral si algo puso de relieve es la ausencia de fronteras tangibles entre el Estado y el partido oficial, así como la falta de escrúpulos y de respeto a las leyes y Constitución por parte del sector reeleccionista.

De igual manera, en contra de esta posibilidad se expresará la resistencia legítima de quienes a lo interno del PLD se sienten con meritos y liderazgo suficientes para optar por la presidencia del País y se verían en desventaja si en las primarias de su partido uno de los participantes es a la vez presidente de la República, tal y como fue el caso de la contienda que enfrentó a Danilo Medina y al reelecto presidente Leonel Fernández.

Pero mas allá de cuan posibles puedan resultar ser o no estas variables, lo cierto es que la reforma constitucional marcará el debate político a partir del 16 de agosto, fecha en que tomaran posesión para un periodo de 4 años las autoridades nacionales reelectas.

De nuestra parte, hay que insistir en medio del debate en la necesidad de hacer posible una reforma constitucional profunda y democrática, para lo cual el procedimiento de la Asamblea Constituyente, electa por el voto popular, sigue siendo el camino mas acertado, contrario a la posición del oficialismo que insistirá en el de la conversión del Congreso en Asamblea Revisora.

En el caso del PRD, a partir de su historia y de hechos recientes y posiciones asumidas posterior al 16 de mayo, todo parece indicar un agravamiento de una problemática interna, acentuada por la muerte de José Fco. Peña Gómez, que no logró superar ni con la victoria presidencial del 2000, ni su convención electoral donde se eligió a Vargas Maldonado como candidato presidencial ni su propio desempeño en la contienda pasada.

Su cúpula, en su diversidad de tendencias y grupos, incapaz de sacar provecho a fondo de sus resultados electorales y de ponerse de acuerdo sobre su rol como fuerza opositora al PLD, se enfrenta destructivamente por el control del aparato partidario y sus recursos, por posibles candidaturas para las elecciones de medio termino del 2010 y por la candidatura presidencial del 2012, a la vez que por el liderazgo del Partido. Sólo esto explica la agresiva declaración del presidente del PRD, Ramón Alburquerque, a días de terminadas las votaciones, en contra de Miguel Vargas Maldonado, al cual descalificó tanto como líder como potencial candidato del partido blanco, y el “reactivamiento” del denominado PPH liderado por Hipólito Mejía.

Peor aún resulta ser la situación del PRSC. Ni la matemática electoral ni su liderazgo les ayudaran a superar su condición agónica. Su papel en la coyuntura electoral se lleva no sólo su candidato, sino también su liderazgo. De ahí, como casi siempre ocurre en la

derrota, está la búsqueda de culpables entre ellos mismos, más que de soluciones reales a su crisis interna. El llamado ya formulado por algunos a la renuncia de quienes han dirigido dicho partido en los últimos años, testifica esta conducta autodestructiva.

Súmele a sus dificultades propias, el trabajo consciente y sistemático que desde fuera realizan sectores desafectos a la dirección del PRSC por hacerlo desaparecer orgánicamente, labor en la que sobresalen grupos balagueristas que apoyaron la reelección y el propio PLD. Nada de esto significa que vaya a desaparecer, menos en un país donde el valor de cualquier franquicia electoral se mide en millones de pesos y pequeños espacios de poder.

CONTEXTO GENERAL DE NUESTRA PARTICIPACION

La candidatura presidencial de Guillermo Moreno, en la boleta del Movimiento Independencia Unidad y Cambio (MIUCA) y sostenida por otras agrupaciones de izquierda, grupos sociales y ciudadanos independientes, surgió en un momento de reconfiguración del sistema partidario que se había establecido a partir de las elecciones generales del 1990.

De un sistema multipartidista, pero hegemonizado por 3 partidos, ya pasaba a otro dominado por 2 grandes colectividades. Temprano en el año 2008, era previsible un retorno al predominio del bipartidismo, esta vez teniendo como protagonistas a 2 partidos proveniente de un mismo tronco orgánico, distinto al bipartidismo que rigió desde el primer proceso electoral post Revolución de Abril (1966), hasta el torneo electoral del 16 de mayo del '90. En el actual, el bipartidismo está representado entre el PLD y el PRD, mientras que en el anterior lo fueron el PRSC y el PRD, política e históricamente representante de lo conservado y lo liberal en el país, respectivamente.

El predominio de la polarización entre los partidos señalados, que se intensificó en el último mes de la campaña electoral, afectó las potencialidades de los candidatos sostenidos por partidos minoritarios. Este fenómeno fortalece el denominado voto duro de los partidos hegemónicos y arrastra tras de sí a los indecisos, como al segmento ciudadano que encuentra utilidad en su voto a partir de que sirva a las aspiraciones de quien pueda ganar o de impedir la victoria de otro. La polarización entre el PLD y el PRD mermó la visibilidad y las mejores posibilidades de nuestro candidato.

Operó, también, como factor preponderante en nuestra contra y de nuestras aspiraciones, lo tardío que salimos con el candidato, producto, entre otras cosas, de un protagonismo insulso de algunos sectores; de ese siempre querer ser “cabeza de ratón” que como tragedia acompaña a nuestra izquierda y a un intento sano, lo que no quiere decir políticamente correcto, por aplicar a la realidad de este litoral procedimientos de selección del candidato que bien pueden resultar efectivas en otras corrientes y circunstancias, pero no en las nuestras, por lo menos en el contexto electoral del 2008.

A 110 días del acto de votación fue que proclamamos, formalmente, la candidatura de Guillermo Moreno. Al esto combinarse con la débil presencia política-social de la corriente básica que sostenía las aspiraciones presidenciales del candidato, a la selección de una compañera de formula, con indiscutibles meritos, pero proveniente del mismo litoral, a nuestras limitadas experiencias en lides electorales y a una baja operatividad organizativa, condicionaron unos resultados que no reflejan las potencialidades del candidato y de la propuesta política de alianza-país.

No se sintió un apoyo en toda su magnitud por parte de sectores convergentes alrededor de la propuesta política y de la formula electoral que nos representó, lo cual puede estar sugiriendo una débil comprensión de los cambios que se han operado y que, entre otras consecuencias, nos presenta como uno de sus aspectos mas visibles la emergencia de la lucha institucional como un factor sustantivo en el proceso de construcción de una opción política de poder.

En lucha contra corriente, intervenimos en una contienda controlada por una clase política, y sus candidatos, profundamente corrupta y corruptora; desprovista de ética y parámetros morales y promotora, por tanto, de la cualquierización de la política.

De una clase política que usa para sus conveniencias electorales, sin rubor ninguno y de manera perversa, las dolorosas condiciones sociales y materiales en que viven millones de personas en nuestros barrios, campos y ciudades para condicionar su derecho ciudadano al voto.

Esto puede explicar, parcialmente, nuestro resultado y el que alrededor del 75% de los votos que alcanzamos estuvo concentrado en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y Duarte. Un voto urbano y, tal vez, proveniente, en su mayor parte, de sectores medios de la sociedad.

NUESTROS RESULTADOS

Aun así, los 18,136 votos (0.44%) contabilizados al compañero Guillermo Moreno, como los niveles de proyección de la política en que se sostuvo su candidatura, justifican una participación que requiere mejorar y eficientisarse y validan el proceso de unidad entre organizaciones y personas independientes que iniciamos meses atrás.

Aunque en extremo distante a la 1era candidatura mas votada, la nuestra quedó en la quinta posición a escasa distancia del candidato de la 4ta. Vía, el cual, como sabemos, proviene de una familia con vínculos históricos con el poder y quien había sido candidato, 4 años antes, del partido que por más tiempo ha gobernado el país en los últimos 42 años. Candidato, por demás, que tenía como compañero de formula a quien había sido, por mucho tiempo, Secretario General del partido de masa históricamente mas importante de República Dominicana.

Guillermo quedó establecido como el rostro y la voz mas confiable de lo progresista y decente. Quedó, en el imaginario de muchas y muchos que por el NO votaron, como una

persona “que algún día será presidente del país”, como decían algunos/as dominicanos/as obligados/as a emigrar por una sociedad medularmente injusta y desigual. Quedó como una referencia en el nuevo liderazgo nacional que se perfila predominante para las dos próximas décadas del siglo XXI.

Por las múltiples experiencias vividas por parte de activistas convergentes, tanto en el exterior como en el país, su nivel de respeto y admiración es común en la mayor parte de quienes les conocieron durante la coyuntura recién pasada. Esto incluye a militantes y simpatizantes de entidades partidarias que fueron objetos de nuestra crítica y valoración negativa.

Para muchas/os, sus 18,000 votos hacen recordar al ex presidente Juan Bosch, cuando logró el mismo número en su primer intento (1978) por alcanzar la presidencia de la República a través del PLD, cuando éste era un proyecto de liberación nacional.

18 mil votos enmarcados en el establecimiento de una nueva voz y un nuevo rostro que constituye la emergencia de Guillermo Moreno a la palestra pública dominicana como un dirigente político refrescante, afable, respetuoso y a la vez firme en sus convicciones y decidido a marchar a través de una política amplia y plural que enfoque y reivindique la solución de las necesidades y los recónditos deseos del pueblo y la búsqueda de los cambios que se avizoran en el futuro inmediato.

Guillermo y cientos de compromisarios de esta política de unidad y convergencia, que tiene que ser aún más amplia, logramos multiplicar por 3 los votos acumulados individualmente por cada candidato de izquierda en las elecciones del 2004.

En comparación con lo que logramos en el 2004, en Nueva York pasamos de 47 votos a 173 (0.58%), en EE.UU. de 62 a 255 (0.49%) y en todo el exterior de 79 a 329, para un 0.43%. Quedamos, así, en la 4ta posición como candidatura más votada.

Súmele a esto, tanto en el exterior como en el país, el haber logrado atraer a esta política a grupos ciudadanos diversos sin compromiso partidario, cuyo aporte fue mucho más allá de una donación económica, de echar el voto por el candidato o asistir a un evento público, para expresarse también en el ámbito de la definición de planes y políticas y ser un factor activo en la defensa y proyección práctica de nuestro candidato.

OTRA VEZ, QUE HACER?

Ahora nos queda amplificar el espacio alcanzado y buscar darle sustento orgánico, para lo cual es vital un serio esfuerzo tanto del compañero Moreno, como de los grupos operantes, para conectarnos con quienes fueron nuestros posibles votantes y también con esa franja ciudadana insatisfecha con el partidismo tradicional dominicano, partiendo de la lógica política organizacional del país que tiene en el precinto electoral su base primaria.

Tenemos que abordar, con la seriedad que implica la lucha por el poder político de una nación, lo referente a cédular y empadronar. Cientos de familiares, amigos/as y compañeros/as potenciales votantes de nuestra fórmula presidencial no lo hicieron por una o ambas de las condiciones indicadas y que son fundamentales para el ejercicio del voto. A partir de ahí, esta se convierte en una de nuestras tareas primarias en lo inmediato. Y si lo combinamos con la identificación de quienes ejercieron el voto a favor de nuestra propuesta, podemos ir elaborando el pequeño padrón contentivo del voto duro inicial de nuestro espacio unitario.

Es un desafío descifrar cómo mantener un espacio común guiado por una visión profundamente democrática, donde el lugar que cada quien ocupe lo determine su capacidad para aportar y su responsabilidad y efectividad en la ejecución de lo acordado; una visión que reduzca, cada día, los empeños improductivos que caracteriza parte de nuestra conducta, como izquierda, de pretender someter y controlar, a nuestra particular y muy especial forma de ser “vanguardia”, todo lo que tocamos, matando así la riqueza y potencialidad que resulta de una diversidad creadora.

De esta experiencia se deduce la necesidad de construir una organización amplia, democrática, plural y respetuosa, que asuma la defensa de los intereses populares, de la soberanía y la independencia de nuestro país y que, al mismo tiempo, asuma el derecho internacional y el diálogo como eje de solución a los problemas y las controversias y su corolario sea el objetivo político de un gobierno decente que impulse los cambios y las reformas económicas, políticas y sociales que necesita el país.

Dicho proyecto tiene que ser consecuencia de una conjunción de fuerzas políticas, sociales y de grupos de ciudadanos sin compromisos con las elites dominantes. De una unidad que trascienda en la sociedad a partir de la calidad de sus forjadores y de su indiscutido compromiso por reencausar el rumbo de la Nación, hacer más efectiva la democracia, fortalecer la institucionalidad y colocar como prioridad del poder y de las funciones públicas los intereses de las grandes mayorías.

Más que un frente político clásico, sumatoria de lo más cercano y coincidente, de lo que se trata es de construir un espacio común de grupos sociales, políticos y ciudadanos/as plurales que nos asumimos aliados/as y compromisarios/as no a partir de la preferencia política partidaria, origen social o adscripción ideológica, sino de una condición ciudadana responsablemente ejercida tras un grande y nuevo proyecto de nación, el cual

pasa para su realización, entre otras condiciones, por el surgimiento de una nueva mayoría ciudadana.

Como proyecto de poder que pretende ser este esfuerzo convergente, tiene que aupar la organización de quienes se sientan afectados por el poder vigente, a la vez que buscar respuestas a los problemas puntuales que enfrenta la sociedad y que por la irresponsable conducta de las cúpulas dominantes, siguen siendo tareas pendientes aun después de 47 años de derrocada la dictadura de Rafael Trujillo.

Por ejemplo, ahí tenemos la Constitución de la República. Con rasgos trujillistas, es la Constitución impuesta por la contrarrevolución a partir del fracaso de la Revolución de Abril del 1965. Es una Constitución desconectada de la nueva y cambiante realidad local y mundial del siglo XXI, que urge ser mas que modificada, sustituida por un nuevo texto Constitucional, producto, preferiblemente, de una Asamblea Constituyente elegida exclusivamente para tal fin.

Tanto en su procedimiento, contenido y alcance, las reformas en el ámbito constitucional tensará en los próximos meses el país político, mas cuando el PLD reelecto a nivel del Ejecutivo y con una apabullante mayoría congresional, no necesariamente unificada, pretenderá una reforma que considere aspiraciones sentidas de la sociedad, pero que responda, al mismo tiempo a sus intereses partidarios de perpetuarse para siempre en el poder político de la nación.

Nuestra intervención en la lucha por la reforma constitucional, debemos asumirla como un componente esencial de nuestra orientación política general, para este periodo, por democratizar de manera real el país. Dicha democratización, ha de contemplar, entre otras aspiraciones, una descentralización efectiva, no solo formal, del Poder, un fortalecimiento de las instituciones democráticas, una sujeción y predominio de la Constitución y las leyes en el ejercicio de la función pública y un mejoramiento continuo de los derechos electorales de la ciudadanía y de la propia ley que rige en la materia.

La democratización real del país obliga a hacer más efectivo e independiente el poder judicial y darle contenido social a la democracia existente, para que esta adquiera sentido no solo en los procesos electorales, sino en la cotidianidad de la población.

Tenemos que articular propuestas que puedan beneficiar a los partidos minoritarios, ejemplo la representación legislativa mediante el sistema de acumulación del voto nacional, y otras propuestas que como el plebiscito, el referéndum y la revocación del mandato, incluido el Presidente, refuerzan el poder de decisión de la ciudadanía.

Comprobado el uso de los recursos y bienes del Estado a favor de un partido y su candidato, procede también reforzar la ley en este sentido, de manera que las elecciones puedan ser tal y no la compra de una posición mediante el uso de los recursos públicos y privados como si fuera un juguete para el día de Reyes. Hay que penalizar como un crimen el delito electoral y producir los cambios legales requeridos para establecer la figura del fiscal electoral independiente, cuyas funciones básicas serian la investigar,

perseguir y buscar la sanción que la ley demanda ante cada caso delictivo que caiga en este ámbito.

A la vez, esto tiene que venir acompañado con una modificación a la ley de financiamiento de los partidos políticos. Un componente a considerar es poner un límite en el gasto de campaña para todas las instituciones y las candidaturas, así como hacer público el monto y las fuentes de financiamientos. Quienes no se sujeten al límite en el gasto, no podrán ser favorecidos por el financiamiento estatal.

Además de derechos políticos y ciudadanos como los esbozados, este proceso de modificación constitucional tiene que contemplar el elevar al rango de derecho constitucional aspiraciones económicas sustantivas que busquen reducir, y en el mejor de los casos acabar, con la injusta **iniquidad social** que como provocación permanente a la mayoría hace posible una concentración de bienes y riquezas en un reducido porcentaje de dominicanos/as, mientras expande y profundiza la pobreza.

Esta batalla de alcance estratégico se complementa con nuestra participación en las elecciones congresionales y municipales supuesta a efectuarse en el 2010. Ésta será una gran prueba para la política unitaria en construcción. Es conclusivo que debemos prepararnos desde ahora. Esto implica, ir definiendo los procedimientos para elegir los compañeros y compañeras que postularemos y considerar no solo la antigüedad en el servicio y el origen de su militancia, sino, y sobretodo, el liderazgo que pueda representar él o la posible candidato/a y su identidad con nuestra propuesta política. En este sentido, tenemos que pensar más allá de nuestras fronteras orgánicas.

Su agenda, desde ya sugerimos que se considere para su elaboración la mas amplia consulta de ciudadanas/as y de pobladores, de manera que resulte se una fotografías fiel de la realidad sectorial, barrial, municipal y provincial en la que intervenimos y de la realidad a que aspiramos construir desde los poderes locales.

Nuestra campaña de participación en esas elecciones, ha de servir, además, al fortalecimiento del poder municipal, que es el más cercano a la población, concebido, dicho fortalecimiento, en una estrategia de largo alcance descentralizadora del poder nacional.

Así como una democracia participativa requiere de un ejercicio activo y responsable, un poder municipal efectivo también requiere de sectores poblacionales y comunidades con sólidas y activas organizaciones, sean en los ámbitos de genero, generacional, cooperativo, medio ambiental, etc. Por eso, tenemos que colocar entre nuestras prioridades para esta coyuntura el ayudar al surgimiento de un nuevo movimiento social que respetando sus intereses primarios, su existencia y operatividad sirvan, a la vez, al cambio político-social en República Dominicana.

En lo inmediato, los distintos factores que hicimos posible la participación electoral de nuestro litoral estamos compelidos a definir el nombre y la simbología con que

operaremos política y electoralmente y concomitantemente seguir construyendo el movimiento.

Para esto se nos presentan varias opciones, entre ellas:

-Seguir actuando políticamente a través de un espacio común que genéricamente podemos denominar Convergencia o Alianza País, mientras el MIUCA resultaría ser la sobrilla electoral bajo la que nos cobijaremos para las elecciones de medio termino.

-Con el consentimiento del MIUCA, cambiar, ante la JCE, su nombre y simbología por el de Convergencia por una Nueva Mayoría o Alianza País y bajo el cual operaríamos en el ámbito político-electoral los distintos factores convergentes. Esta posibilidad no cuestiona ni el derecho ni la pertinencia del MIUCA para continuar funcionando y actuando como entidad autónoma que a su vez es un factor convergente.

-Buscar el reconocimiento electoral de un aparato representativo del conjunto de personas y grupos que estamos construyendo esta política de unidad amplia, sin que el MIUCA pierda su registro electoral y sin que se suprima el derecho que tiene cualquier otra entidad partidaria convergente para optar por su propio reconocimiento electoral.

Cual que sea la modalidad que predomine, lo que desde ya tiene que estar claro es que debe servir a la unidad del conjunto y a potencializar nuestra estrategia de generar un cambio progresista en la sociedad dominicana, previa derrota y superación crítica de las elites dominantes.

Yendo mas allá de la coyuntura, el **Movimiento Revolucionario Nueva Patria** asume el balance y las propuestas para el momento guiado por la aspiración de contar con un grande y trascendente proyecto emancipador, cuyo ideal y empeño por transformar el Estado y la sociedad de manera integral, se convierta en una forma de vida para sus integrantes, vida llena de pasión y dedicación revolucionarias.

De cara a ese gran propósito de largo alcance, auspiciamos la integración orgánica de los proyectos más coincidentes en su visión ideológica y propuesta final de sociedad, lo que de producirse nos permitirá alcanzar nuevos y superiores niveles de unidad, y como consecuencia una reducción de la visión de dispersión y disgregación que nuestro litoral ha proyectado desde los tiempos de la imposición de la contrarrevolución a finales de la revolución de Abril.

CRISIS ECONOMICA, LUCHA SOCIAL Y LINEA DE OPOSICION AL GOBIERNO

Aunque parte de una crisis económica global, la nuestra está marcada por razones estructurales propias. Es una crisis que encuentra, entre factores primarios, este conocido e interminable proceso de privatización de bienes y servicios públicos que vivimos, el sujetar todo a las leyes del mercado, reducir la responsabilidad social del Estado y en quebrar el carácter productivo de la economía, para transformarla en una de servicio. Factores, por demás, que han sido apuntalados por los gobierno del PLD, con la colaboración de las cúpulas de los demás partidos sistémicos, y las cuales reivindican onrdamente el modelo económico y los tratados comerciales desiguales que los han posibilitados.

Ciertamente, múltiples factores exógenos, como el alza extraordinaria en los precios del petróleo, los efectos de la guerra en Irak, el estado de recesión que registra la economía estadounidense, la crisis alimenticia mundial, la cual es inseparable del carácter especulativo del capitalismo, impactan y seguirán impactando seriamente en la economía nacional, mas cuando disminuirá la remesa de la diáspora y seguirá incrementándose el costo sobre los precios de materias primas importadas y que resultan vitales para la generación de muchos productos de factura nacional.

Súmele a esto, una baja en las exportaciones y un aumento en las importaciones, lo que afecta desde ya nuestra balanza comercial. A menor captación de divisas vía las remesas y la baja en las exportaciones y a mayor necesidad de dólares para las importaciones, se devaluará aun más la moneda nacional y aumentará el número de empresas que se irán a la quiebra, así como el desempleo y los precios en artículos y bienes de primera necesidad y consumo popular.

El agravamiento de nuestra problemática económica se dará, a pesar de los beneficios que generan para el país iniciativas económicas y comerciales signadas por la solidaridad, ejemplo Petrocaribe, que tienden a reducir el impacto negativo que genera el alza continua que se verifica en los precios del barril del petróleo y sus derivados en el mercado internacional.

Los niveles de nuestra crisis se han de profundizar, también, por la irresponsabilidad política de las autoridades nacionales y su sujeción a las elites autóctonas y a los organismos económicos y financieros internacionales controlados por las grandes potencias, ejemplo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), así como por su conocida vocación y practica clientelal, corrupta y vilipendiosa, siempre en perjuicio de las prioridades y necesidades de las mayorías.

De que la crisis económica es un hecho, como también su empeoramiento en los meses por venir, no está en discusión. Lo que aún no es previsible es la magnitud de su impacto en la vida de millones de trabajadores, desempleados, sectores de la clase media y comunidades pobres. Incluso, diversos organismos internacionales han indicado que los

precios en los alimentos básicos continuaran subiendo hasta el 2015, con lo cual la posibilidad de una hambruna mundial nos acecha como tragedia colectiva.

Ante ese panorama la gente no solo deben defenderse, sino que tienen que defenderse. Las luchas sociales serán respuestas inevitables y nosotros estamos obligados a acompañarles de manera protagónica. Es posible que algunas de estas respuestas, en el caso nacional, alcancen magnitudes serias, lo cual puede confundir la mentalidad y el orden de prioridad política de algunos en nuestra izquierda. Encausarla acorde a los niveles de conciencia y de organización de la población, sin desnaturalizarlas, es un ejercicio responsable de actuación de un proyecto contestatario que busca construir un poder nuevo, mas que “asaltar” el poder existente.

Esto implica, además, esforzarnos por combinar la naturaleza social de las protestas poblacionales y sectoriales, con una perspectiva política transformadora, evitando así lo que hasta ahora ha ocurrido, que quienes mas beneficios políticos les han sacado a las protestas sociales encauzadas por las izquierdas y el movimiento popular, han sido los sectores de la derecha ubicados en la oposición política.

Por eso, junto a la promoción de la protesta y organización responsables de ciudadanos/as y pobladores, nos sale la defensa y aplicación de una línea de oposición activa a un gobierno administrado por un equipo político con una débil voluntad para ejercer sus funciones con apego a la ley y a la Constitución.

Combatir los excesos gubernamentales que ilegitiman parcialmente sus decisiones, se inscribe, de nuestra parte, en un empeño efectivo por radicalizar la democracia, fortalecer el poder ciudadano y democratizar, de manera real, el poder político de la Nación.

Para esto es fundamental su descentralización y una modernización de sus instituciones a partir no solo de la asunción de los aspectos que caracterizan la nueva gerencia y administración, sino, y sobretodo, de que su funcionamiento vaya mas allá de los intereses de los pequeños grupos y caudillos que les controlan, para resultar ser instituciones al servicio de la ciudadanía y de un estado moderno.

Nuestra política y conducta opositoras, se han de expresar en todos los escenarios de lucha institucional y social, observando siempre los niveles de conciencia de la población y considerando los desiguales niveles de correlación de fuerzas que se dan entre el litoral a que pertenecemos y el bloque dominante.

Hay que esmerarse en ser oposición verdadera al gobierno, para lo cual es fundamental marcar la diferencia con quienes la condición de oposición deviene no de contradicciones sustantivas con el partido oficial, sino por su afán de controlar el Estado como una excelente vía para acumular e incrementar riquezas de grupos y particulares en poco tiempo y libre, mayormente, de peligros. Así reafirmamos el camino independiente, sin que esto signifique marchar solo en la lucha contra el factor político hegemónico principal en el escenario nacional.

Como espacio opositor, tenemos que desempeñar nuestro rol respondiendo a una orientación política promotora de los liderazgos locales, de un proceso de acumulación de fuerzas que nos haga fuerte en puntos prioritarios y así poder proyectarnos de manera mas efectiva en el ámbito nacional.

Al mismo tiempo, tenemos que mantener un discurso activo, irreverente y propositivo sea al nivel barrial, municipal, provincial, regional o nacional, como recurso para desenmascarar las políticas nocivas del oficialismo y como medio de agitación, educación y formación de opinión pública en el pueblo.

Establecida la electoral como **vía fundamental** de lucha para producir un cambio progresista en el país y articular un gobierno decente que tenga como prioridad las necesidades humanas, todas nuestras acciones sean de denuncia, propuestas, organización, educación, protesta social, etc., tienen que estar al servicio de nuestra participación en las elecciones de medio termino y en las presidenciales del 2012.

La lucha por el poder, cual que sea el procedimiento, si de algo tiene que prescindir es de los espacios para la improvisación. Todo tiene que ser metódicamente planificado y cada acción tiene que servir a otra de mayor envergadura, siempre vinculada a la estrategia previamente establecida: ser poder.

Junio del 2008